



Sociedad y Economía

ISSN: 1657-6357

ISSN: 2389-9050

Facultad de Ciencias Sociales y Económicas- Universidad
del Valle

Acosta-Oidor, Catalina; Ortiz-Piedrahita, Vanessa
Violencia en Buenaventura-Colombia: reflexiones desde
las perspectivas de Aníbal Quijano y Achille Mbembe
Sociedad y Economía, núm. 45, e10411164, 2022, Enero-Abril
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas- Universidad del Valle

DOI: <https://doi.org/10.25100/sye.v0i45.11164>

Disponible en: <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=99671138004>

- Cómo citar el artículo
- Número completo
- Más información del artículo
- Página de la revista en redalyc.org

UAEM  redalyc.org

Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal
Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso
abierto



SOCIEDAD
& ECONOMÍA

N° 45

Ene - Abr 2022

Créditos fotografía: <https://bit.ly/3ECOvqx>

Violencia en Buenaventura-Colombia: reflexiones desde las perspectivas de Aníbal Quijano y Achille Mbembe

*Violence in Buenaventura-Colombia: Reflections from the
perspectives of Aníbal Quijano and Achille Mbembe*

Catalina Acosta-Oidor¹

Universidad Santo Tomas, Bogotá, Colombia

✉ catalinaacosta@usantotomas.edu.co

ID <https://orcid.org/0000-0003-0823-7021>

Vanessa Ortiz-Piedrahita²

Universidad Nacional de Colombia, Arauca, Colombia

✉ vaortizp@unal.edu.co

ID <http://orcid.org/0000-0003-4698-7050>

Recibido: 16-04-2021
Aceptado: 06-10-2021
Publicado: 15-12-2021

.....
1 Magíster en Sociología.

2 Doctora en Ciencias Sociales, con énfasis en Estudios Comparativos sobre las Américas.

Resumen

El artículo tiene como objetivo analizar la dinámica violenta en Buenaventura-Colombia, como parte de la necropolítica implementada por el Estado en la cual diversos actores armados ilegales y sus repertorios de acción –terror y muerte– se establecen como medios para controlar a la población. Este análisis se orienta a través de la perspectiva teórica de Aníbal Quijano sobre “La colonialidad del poder” y la visión de Achille Mbembe sobre “Necropolítica”. Metodológicamente, la indagación utilizó un enfoque cualitativo basado en el análisis del periódico El País, el portal Verdad Abierta y los informes para el Desarrollo y Paz (INDEPAZ), durante los años 2010-2019. Se concluye que el contexto sociopolítico de Buenaventura es un ejemplo patente de la relación existente entre la modernidad, el terror y la muerte, por cuenta de un sistema de dominación en el que confluye la clasificación étnica-racial y de clase social de sus habitantes.

Palabras clave: colonialismo; poder; violencia; necropolítica; afrodescendientes.

Abstract

This article aims to analyze the violent dynamics present in Buenaventura-Colombia, as part of the necropolitics implemented by the State in which various illegal armed actors and their repertoires of action –terror and death– are established as means to control the population. This analysis is conducted through the theoretical perspective of Aníbal Quijano on “The coloniality of power” and the vision of Achille Mbembe on “Necropolitics”. Methodologically, the inquiry used a qualitative approach based on the analysis of the newspaper El País, the portal Verdad Abierta and the reports for Development and Peace (INDEPAZ) during the years 2010-2019. It is concluded that the socio-political context of Buenaventura is a clear example of the relationship between modernity, terror and death, due to a system of domination in which the ethnic-racial and social class classification of its inhabitants converge.

Keywords: colonialism; power; violence; necropolitics; afro descendants.

Financiación

Esta investigación hace parte del proyecto Fodein 2020, *El ejercicio del poder en Colombia: momentos de Conflicto, Consenso y Violencias*, en el que participó la docente Catalina Acosta de la Universidad Santo Tomás, Bogotá, en colaboración con la docente Vanessa Ortiz Piedrahita, miembro del semillero de investigación *Género, conflicto y estudios socio-culturales* de la Universidad Nacional de Colombia, sede Orinoquía. Una primera versión del texto se presentó en el XIII Congreso Nacional de Sociología “60 años de la sociología en Colombia. Tensiones y cambio social en el contexto latinoamericano”, que se llevó a cabo del 9 al 11 de diciembre de 2020.

Conflicto de interés

Las autoras declaran no tener ningún conflicto de interés en la publicación de este artículo.



Este trabajo está bajo la licencia **Atribución-No-Comercial 4.0 Internacional**

¿Cómo citar este artículo?

Acosta-Oidor, C. y Ortiz-Piedrahita, V. (2022). Violencia en Buenaventura-Colombia: reflexiones desde las perspectivas de Aníbal Quijano y Achille Mbembe. *Sociedad y economía*, (45), e10411164. <https://doi.org/10.25100/sye.v0i45.11164>

1. Introducción

El intento por conocer y comprender la dinámica de funcionamiento de una ciudad como Buenaventura implica necesariamente una referencia constante a la presencia de la violencia como factor característico de su historia y desarrollo en los últimos 50 años. Diversos estudios confirman que la violencia es resultado de la posición geoestratégica como ciudad-puerto, lo que la hace zona de interés para una multiplicidad de actores legales e ilegales (Flórez y Ruiz, 2018; Gómez *et al.*, 2017; Acosta, 2010; Carvajal y Alberto, 2007). La expansión de estos últimos se alimenta de las condiciones socioeconómicas precarias de su población, pese al desarrollo progresivo del puerto, que representa ingresos importantes para el país –50% del comercio exterior, según El Tiempo (2020)–. A estos factores se agregan, como una variable a considerar, las condiciones étnico-raciales de esta población, conformada en un 90% por comunidades afrocolombianas, un 6% por comunidades indígenas y solo un 4% por población mestiza (Flórez y Ruiz, 2018).

A partir de las características mencionadas, el presente artículo tiene como objetivo principal analizar la dinámica violenta presente en Buenaventura como parte de la necropolítica implementada por el Estado, en la cual los diversos actores armados que confluyen en el territorio recurren a prácticas violentas, al terror y la muerte como sus repertorios de acción, en aras de controlar y expulsar a la población.

El análisis se orienta a partir de la mirada de Aníbal Quijano (2000) sobre la colonialidad del poder, y desde la propuesta de Achille Mbembe (2011) sobre el concepto de necropolítica y necropoder. Es decir, desde estas perspectivas de análisis, la violencia presente en la cotidianidad de Buenaventura obedece al ejercicio de mecanismos de control del Estado y de quienes hacen las veces de autoridad en el territorio. En el primer caso, por cuenta de la ausencia de medidas tomadas por los gobiernos nacional y local para controlar la situación violenta y la perpetuidad de los actores ilegales. En el caso de estos últimos, porque utilizan la violencia extrema, materializada

en amenazas, extorsiones, desplazamientos forzados, torturas, asesinatos selectivos, masacres, desapariciones forzadas y “casas de pique”. Así, se plantea entonces una relación entre la modernidad, el terror y la muerte, en articulación con una relación de discriminación entre quienes ejercen el poder –actores legales e ilegales– y los bonaverenses, en los que se manifiestan las categorías de clase (populares), raza y etnia (afrocolombianos e indígenas).

Para la realización de la investigación, se utilizó una metodología cualitativa, basada en la revisión de notas de prensa de los periódicos colombianos El Tiempo, de circulación nacional, y El País, de circulación regional; los informes del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ, 2020), la Corporación Nuevo Arco Iris (2017); y las noticias publicadas en el portal Verdad Abierta, durante los años 2010-2019. Estas últimas cuatro fuentes obedecen a organizaciones de carácter independiente que recopilan información sobre el conflicto armado y la violencia política, la cual se encuentra disponible en sus páginas web. A su vez, estas fuentes fueron seleccionadas teniendo como criterio la viabilidad empírica, es decir, la posibilidad de acceder a ellos de manera digital y física y, finalmente, se consideró para la selección el criterio de representatividad; en otras palabras, que los documentos escritos escogidos fuesen relevantes a nivel nacional y local en cuanto al tema de indagación.

Cabe señalar que, a partir del análisis de las fuentes primarias de información, se identificaron tanto los elementos que caracterizan la dinámica violenta de la ciudad de Buenaventura, como también elementos del discurso en los que se expresa la dificultad de la situación social, política y económica de la misma. Las fuentes secundarias hacen alusión a los artículos, libros y documentos institucionales que abordan el objeto de estudio desde una perspectiva teórica, normativa y epistemológica. Así, pues, se consultaron textos teóricos alternativos y/o complementarios a la perspectiva decolonial expuesta por Quijano (2000) y Mbembe (2011); también se referenciaron textos e investigaciones alrededor del debate étnico racial y de clase social desde la perspectiva

interseccional en el ámbito de las sociología, y se contextualizó la información con algunos datos sociodemográficos de la población, provenientes de instituciones como el Departamento Nacional de Estadística de Colombia (DANE). Tanto las fuentes primarias como secundarias se contrastaron y triangularon para dar respuesta al objetivo de la investigación, la cual utilizó un diseño de investigación documental-cualitativo.

Ahora bien, el presente artículo está organizado a partir de subtemas o ejes temáticos. En la primera parte del texto, se presenta la descripción sociodemográfica de Buenaventura, Colombia, con el objetivo de contextualizar a los/las lectoras del trabajo. Posteriormente, se presenta una detallada caracterización de actores armados ilegales en Buenaventura, durante los años 2015 y 2019, evidenciándose así una reconfiguración del control territorial después de la firma del Acuerdo de Paz en Colombia, tanto en las zonas urbanas como rurales de Buenaventura. En tercera medida, se presenta el debate sobre la colonialidad del poder y la necropolítica en Buenaventura como formas de violencia y terror ejercidas por diversos grupos armados tanto legales como ilegales en el mencionado territorio. Finalmente, se diserta sobre la fragilidad del Estado colombiano a partir de las denuncias constantes de la población y sus medidas ineficientes de represión. Asimismo, se presenta en este último apartado las conclusiones del artículo, retomando y vinculado la perspectiva decolonial tanto de Aníbal Quijano (2000) como de Achille Mbembe (2011).

2. Contextualización sociodemográfica de Buenaventura

La ciudad de Buenaventura es nominada oficialmente como distrito especial, industrial, portuario, biodiverso y ecoturístico. La cabecera municipal de esta ciudad cuenta con una zona insular –isla de Cascajal– y otra continental; ambas se unen a través del puente El Piñal. Es sobre todo en las zonas y barrios construidos en palafitos de bajamar en donde los grupos

violentos, como las disidencias paramilitares, se han acentuado con más fuerza. En la actualidad, el municipio de Buenaventura consta de “doce comunas que agrupan un total de 157 barrios. Su zona rural tiene 19 corregimientos, 35 Consejos Comunitarios y 22 asentamientos indígenas” (CNMH, 2015, p. 278). Buenaventura hoy es uno de los municipios más críticos a nivel nacional en cuanto al número de víctimas del conflicto armado, en todas sus manifestaciones de miedo y terror: violaciones, desplazamientos, asesinatos, secuestros, mutilaciones, extorsiones y amenazas (Co.marca Digital y Universidad del Cauca, 2019).

En cierta medida, esta ciudad coincide con las características de las colonias descritas por Mbembe (2011), en tanto es una población discriminada e ignorada por el Estado. Es una zona donde habita la pobreza, la marginalidad y la violencia extrema. Su población es afrodescendiente, casi en su totalidad³, y quizás ello, como lo manifiesta tanto Quijano (2000) como Mbembe (2011), es uno de los elementos centrales que explica su marginalidad histórica. Según datos del DANE (2018), la proporción de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) corresponde a un 16,57%. En el caso de la cabecera municipal, se registra un 13,59%, mientras en el resto se registra un 31,21%; siendo el de mayor índice en comparación con el resto de ciudades del Valle del Cauca. En el caso de Cali, por ejemplo, la proporción de NBI corresponde a 4,08%. Adicionalmente, se reporta en Buenaventura la tasa más alta (25%) de rezago escolar en todo el Valle del Cauca, correspondiente a la educación básica y media (DANE, 2018). Los adultos ocupados laboran en mayor proporción (32%) en el sector terciario de la economía (hoteles, restaurantes, comercio). En cuanto a los adultos no ocupados, según reportó el DANE (2018), tiene una de las tasas más altas de desempleo del país (18,4%).

3 De acuerdo con datos del Censo 2018, realizado por el DANE (2018), el Valle del Cauca registra el 40,1% (647.526) de la población reconocida como negra, afrocolombiana, raizal o palenquera. Buenaventura es sin duda la ciudad de este departamento que más congrega a dicha población, seguida por ciudades como Cali y Puerto Tejada.

A su vez, este municipio posee características propias que lo hacen vulnerable a la presencia constante del conflicto armado. La posición geoestratégica de Buenaventura, como ciudad-puerto sobre el océano Pacífico, ha hecho de este territorio una zona de conflicto que ha dejado muchas víctimas. Hoy el capitalismo vigente requiere asegurar fuentes de abastecimiento de recursos materiales y energéticos, los cuales se encuentran concentrados en unas pocas zonas del planeta (Vega-Cantor, 2012). Buenaventura no es solo usado para el negocio del narcotráfico, sino para explotar ilegalmente oro, madera y otros minerales preciados en el mercado internacional. La importancia estratégica de América Latina, y particularmente de Buenaventura, en el escenario de esa guerra mundial por los recursos hoy no se puede obviar. Esta ciudad se ubica en una zona boscosa en donde se encuentra una de las mayores fuentes de biodiversidad del mundo, así que multinacionales también están interesadas en intervenir este lugar, propiciando así pujas y tensiones con los grupos al margen de la ley que ya se han establecido en el territorio desde hace varias décadas, es decir, las guerrillas y, más recientemente, los grupos paramilitares, también llamados Bacrim o Grupos Armados Organizados (GAO)⁴ (Human Rights Watch, 2014).

A su vez, Buenaventura es una ciudad ideal en términos geopolíticos para el contrabando, el narcotráfico y el ingreso de armas, desde la perspectiva de los grupos al margen de la ley. Según Carvajal y Alberto (2007), “la zona rural del municipio es el lugar más utilizado para sacar la droga cultivada en áreas montañosas, municipios del Norte del Valle, y en otros departamentos como Huila, Caquetá y Meta” (p. 45). Sin embargo, el casco urbano de Buenaventura también es centro de operaciones por parte de diferentes tipos de organizaciones

ilegales (guerrillas, paramilitares y organizaciones al servicio del narcotráfico), que se disputan el dominio de los territorios y salidas al mar.

2.1 Caracterización de actores armados ilegales en Buenaventura (2015-2019)

El control rural armado ilegal en Buenaventura se caracterizó, durante la década de 1980, por la presencia de las guerrillas, pero finalizando la década de 1990 entraron nuevos actores armados (paramilitares, Bacrim o los conocidos recientemente como grupos GAO, después del 2006), a ejercer tensión y conflicto territorial. Hoy, el control de las zonas y espacios urbanos es lo más disputado, y no es posible identificar de manera patente un actor hegemónico único que haya logrado consolidarse en la ciudad (Corporación Nuevo Arco Iris, 2017). Se trata de la disputa de áreas urbanas, debido al microtráfico de estupefacientes, pero también a causa del contrabando ilegal de mercancías, entre otras prácticas ilegales asociadas al narcotráfico y la violencia.

Las diferentes territorialidades que operan en el municipio de Buenaventura, desde el 2000, corresponden al uso del espacio por parte de paramilitares, Bacrim y grupos GAO; incluso algunas multinacionales son acusadas de asociarse con los grupos paramilitares ya mencionados, con el objetivo de instaurar su hegemonía armada ilegal en el territorio, provocando, como principal consecuencia, el desplazamiento de la población. Después de la desmovilización del Bloque Calima, en el 2006, se dio paso a los Rastrojos, la Empresa y los Urabeños, quienes se disputaron, entre 2011 y 2014, el control territorial en Buenaventura. Tras esta intensa confrontación, Los Urabeños lograron imponerse hasta hacer casi desaparecer a Los Rastrojos (Corporación Nuevo Arco Iris, 2017).

De esta ciudad se apoderó una banda criminal llamada ‘La Empresa’, que en principio tenía nexos con los ‘Rastrojos’. La llegada de los Urabeños significó una confrontación con esta organización que dejó decenas de muertos y una tragedia espantosa

4 De acuerdo con Human Rights Watch (2014), las organizaciones armadas sucesoras de los paramilitares presuntamente desmovilizados del Bloque Calima o alimentadas con sus hombres, que hacen presencia en el puerto de Buenaventura, son Los Urabeños, La Empresa, Los Rastrojos y Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC).

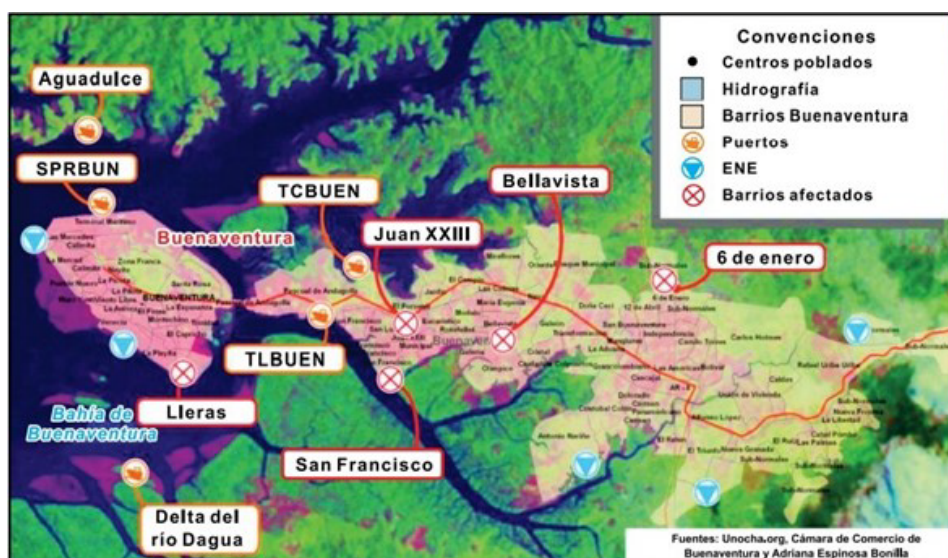
que los medios de comunicación reflejaron a lo largo de 2013 y 2014. Fue en esa ciudad donde se descubrieron las ‘casas de pique’; lugares tenebrosos donde se descuartizaba a seres humanos. A finales de 2014 los ‘Urabeños’ lograron establecer presencia en ocho de las doce comunas de la ciudad y ‘La Empresa’ se había refugiado en cuatro (Valencia *et al.*, 2016, p. 1).

Como se observa en la Figura 1, los barrios más afectados por la presencia de grupos armados ilegales son los siguientes: Juan XXIII, Bellavista, Lleras, 6 de Enero y los barrios aledaños a los proyectos portuarios TCBUN (Terminales de Contenedores de Buenaventura) 1 y 2. Se trata de barrios que se ubican tanto en la zona insular como continental de Buenaventura, y la particularidad de estos hace referencia a su cercanía con las salidas al mar. Estos barrios tienen poco control estatal por parte del ejército nacional y la policía, debido a la presencia violenta de actores armados ilegales. Los habitantes de estos barrios viven en mayor proporción de actividades económicas informales. Si bien

es cierto que las condiciones o calidad de vida de los habitantes de Buenaventura pueden ser inferiores a la media nacional, esta situación se acentúa en los barrios mencionados, ya que el conflicto armado trae múltiples formas de desigualdad social (género, étnico racial, económica). Cabe señalar que los barrios aledaños a los Terminales de Contenedores de Buenaventura (TCBUN)⁵ han sido algunos de los más afectados, no solo por el incremento de actores armados legales e ilegales, sino por el cambio en sus estilos de vida ancestrales, debido a la implementación del capital global y las políticas neoliberales en la región (Caicedo, 2013).

Como se mencionó, actualmente el riesgo de las agrupaciones armadas ilegales se encuentra focalizado en el casco urbano. Desde el 2018, se presenta una re-configuración del control territorial en Buenaventura, debido al espacio que dejaron algunos grupos que se acogieron al proceso de paz en el año 2016, y debido también al surgimiento de nuevos

Figura 1. Barrios con presencia de actores armados en Buenaventura



Fuente: tomado de Valencia *et al.* (2016, p. 13).

5 TCBUN es un terminal de contenedores, hace parte de la infraestructura portuaria del Master Plan que incluye el Puerto Solo, las vías de acceso, el puerto industrial de Agua Dulce, la ampliación del aeropuerto y otros puertos que aún no se han construido.

grupos que pretenden instaurarse en el territorio. En estos últimos años, se evidencia con fuerza el actuar de grupos delincuenciales como La Banda Local, La Empresa, Gente del Orden-FARC⁶, el Clan del Golfo, entre otros (Verdad Abierta, 2019).

Al parecer, el sector que mayores riesgos afronta es la Comuna 12, debido a la disputa que libran La Empresa y La Banda Local, en la cual la segunda busca expulsar a la primera de algunos barrios como Francisco José de Caldas, Nuevo Amanecer, Nueva Floresta, Vista Hermosa, Citronela, La Caucana y hasta de la región del Bajo Calima; sectores privilegiados por donde se movilizan de manera constante tanto armas como estupefacientes (Verdad Abierta, 2019).

Se hace necesario señalar que, recientemente, a las bandas emergentes ilegales se les ha nominado desde la institucionalidad estatal nacional como narcoparamilitares, ya que se han dedicado a servicios ilegales de seguridad criminal, para obtener lucro propio y de terceros; y, además, actúan en alianza con mafias internacionales y actores nacionales que financian la acumulación violenta de riquezas, y agencian prácticas de terror y muerte (INDEPAZ, 2020). En este mismo mercado entran los grupos pos FARC-EP⁷ (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) quienes no se acogieron al proceso de paz (residuales) o, después de firmar el tratado de paz en el 2016, deciden reintegrarse a la ilegalidad (disidentes).

Según datos recolectados por INDEPAZ (2020), el Valle del Cauca es uno de los departamentos que registraron mayor actividad (88,1%) de grupos narcoparamilitares, entre el 2018 y

el 2019. Buenaventura, en este escenario departamental, representa la mayor intensidad conflictiva. Algunos de los grupos narcoparamilitares o grupos que hacen parte de las modernas GAO, con presencia nacional en los últimos años (2015-2019), son La Local, La Empresa, Los AGC (conocidos en Buenaventura como los Urabeños), Cordillera, Los Pachelly, Los Contadores, Los Carrapos, La Construcción y los Puntilleros. Los tres primeros grupos con alta presencia, sobre todo en el Valle del Cauca, y en Buenaventura de manera particular⁸.

Entre los grupos residuales de las FARC-EP, se encuentran a nivel nacional el Bloque Suroriental (Frente Oliver Sinisterra), La Nueva Marquetalia, el Frente 18 (Estiven González), el Frente 10 (Carlos Patiño), el Frente 28 (Fuerza Unida del Pacífico), y el Frente 30 y 48. Específicamente en Buenaventura, el grupo armado que aún tiene control territorial son las disidencias del frente 30, con alta presencia en el Naya; zona minera y territorio estratégico de cultivos ilícitos (Verdad Abierta, 2018).

A pesar de los acuerdos de paz y desarmes, tanto de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) –en el año 2006, durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe– como de las FARC-EP, en el año 2016, durante el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, la paz no ha llegado a los territorios más afectados, puesto que las disidencias o nuevos grupos armados se han reacomodado en los espacios que dejaron los grupos desmovilizados. De hecho, lo que se ha presentado es una intensificación de los ciclos de violencia, impidiendo así el cese del conflicto en los territorios (Gutiérrez,

6 Gente del Orden, que nació de ex milicianos y disidentes de las FARC en Tumaco (Verdad Abierta, 2017).

7 Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo, FARC-EP, fueron una organización guerrillera colombiana de extrema izquierda, que empezaron a operar desde el año 1964 hasta el 2016, cuando firman un acuerdo de paz con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos.

8 Hoy en día están consolidados La Empresa, que tuvo su origen en ‘Los Rastrojos’, y las AGC, que controlan el microtráfico de drogas y las extorsiones (Verdad Abierta, 2017). Otros grupos menos mencionados, pero con el mismo carácter narcoparamilitar, se encuentran distribuidos a nivel nacional: “Los Caqueteños, Liberadores del Nordeste, Águilas Negras, Frente 28, Los Costeños, La Oficina Caribe, Clan Rojas, Héroes del Central Bolívar Bajo Cauca, La Mafia, Los Paisas, Los Botalones, Grupo Pesebre, Los Triana, El Mesa, Los Sombra” (INDEPAZ, 2020, p. 16).

2020). Como se mencionó, en la zona del Naya han hecho presencia las disidencias y los residuales del Frente 30, quienes han mantenido un control más importante en las zonas de las cuencas; aunque después del año 2017, el control territorial se empieza a disputar con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Conforme a los datos expuestos anteriormente, es posible establecer que la reconfiguración del control territorial, por parte de actores armados ilegales en las zonas rurales y urbanas de Buenaventura, se ha acelerado después de la firma del Acuerdo de Paz en el año 2016. Este conflicto incluso se ha agravado por las recientes migraciones venezolanas, puesto que muchas de estas personas estarían siendo utilizadas por grupos ilegales disidentes, residuales y narco paramilitares como recurso humano disponible para la guerra y la expansión del control territorial en zonas donde prima el narcotráfico (INDEPAZ, 2020).

3. Colonialidad del poder y necropolítica en Buenaventura

Como se mencionó en la introducción del presente artículo, el accionar de estas organizaciones ilegales, como también el papel que juega el Estado en la perpetuación de la violencia, se realiza a partir de la categoría de “colonialidad del poder” desarrollada por Aníbal Quijano (2000) y, de manera especial, desde la concepción sobre necropolítica desarrollada por Mbembe (2011). Ambos autores se pueden situar dentro de la denominada perspectiva decolonial o poscolonial, es decir, aquellas visiones contra-hegemónicas que analizan los problemas de sus regiones en interrelación con el contexto globalizado de la contemporaneidad. Se trata de perspectivas que logran erigir un centro de producción alternativo al europeo, con el objetivo de recrear nuevas maneras de pensar, vivir y desarrollar sus propias regiones del Sur Global desde una mirada crítica y reivindicativa.

Usar la perspectiva decolonial a la hora de analizar prácticas de violencia, resulta ser una

apuesta epistemológica y teórica alternativa en el contexto de las Américas. A pesar del proceso de independencia de Colombia, acaecido en el siglo XIX, los procesos de poscolonización interna siguen en pleno siglo XXI, a través de ejercicios violentos que afectan física y simbólicamente aquellos pueblos empobrecidos y etnizados, como las poblaciones afrocolombianas e indígenas de Buenaventura (Balles-trin, 2013).

La historia de Colombia es la historia de la imposición del poder y de la violencia, la cual ha afectado a todos los ciudadanos, pero se ha ensañado sobre todo con aquellos grupos humanos considerados “no modernos” por sus condiciones minoritarias, en términos étnico raciales y simultáneamente de clase social (Wade, 1997). Estas condiciones sociales y sus ubicaciones en el espacio geográfico de la nación los hace más vulnerables y, por tanto, son frecuentemente degradados por los diversos grupos armados ilegales que transitan o habitan sus territorios. Se trata de una historia des-humanizante, la cual se ha enraizado en los nichos más pobres y olvidados estatalmente, como es el caso de Buenaventura.

Desde la perspectiva de Quijano (2000), el elemento central del actual patrón de poder, al que denomina “colonialidad del poder”, es visibilizado a través de la clasificación de la población mundial en torno a la raza. Y tiene lugar a partir del descubrimiento de América.

Así entiende Quijano (2000) la colonialidad del poder:

Uno de los elementos constitutivos y específicos del patrón mundial de poder capitalista se funda en la imposición de una clasificación racial/étnica de la población del mundo como piedra angular de dicho patrón de poder y opera en cada uno de los planos, ámbitos y dimensiones, materiales y subjetivas, de la existencia social cotidiana y a escala societal. Se origina y mundializa a partir de América (p. 285).

Por lo tanto, el fenómeno del poder moderno tiene que ver con la co-presencia de la dominación, la explotación y el conflicto; y ligado

a ello, con la articulación del capitalismo, el Estado nación y el eurocentrismo.

De forma complementaria, Mbembe (2011) considera que la expresión última de la soberanía y sus límites reside ampliamente en el poder sobre la vida. Es decir, en la capacidad para decidir quién puede vivir y quién debe morir, partiendo de las reflexiones sobre el poder desarrolladas por Foucault. Según este autor, a partir del siglo XIX, se experimenta una transformación en los mecanismos de ejercicio del poder, pasando de unas tecnologías de carácter disciplinario que tenían como blanco a los sujetos individuales al despliegue de unas tecnologías de poder que tendrán como objetivo la población, como masa global (Foucault, 1991, citado por Traverso, 2018). De acuerdo con Mbembe (2011), a esta nueva forma de poder Foucault la denomina biopoder, y la define con relación al campo biológico; a partir del cual distribuye la población humana en grupos, generando una ruptura al interior de esta que tiene como base, entre otras, la condición racial. El racismo se constituye entonces en una tecnología que pretende permitir el ejercicio del biopoder.

En las sociedades contemporáneas, el Estado juega un papel central en la coordinación y el funcionamiento de los mecanismos del biopoder. Su soberanía reside en el ejercicio de control sobre la definición de la vida y la mortalidad, es decir, el poder de matar, de dejar vivir y decidir en qué condiciones, y de exponer a la muerte (Mbembe, 2011). En este último aspecto, en el que se materializa la soberanía del Estado, pone el énfasis Mbembe (2011). Su concepto de necropolítica se manifiesta en ese ejercicio del biopoder que determina la población que ha de vivir en condición de muertos, es decir, aquella que se puede dejar morir, o a la que se dirigen las políticas que les ponen en riesgo directo de muerte por la propia acción del Estado, como cuando se decretan estados de sitio o estados de excepción (Mbembe, 2011). Así, por ejemplo, con reserva, se puede decir que en la experiencia de Buenaventura, al tratarse de una población racializada, inmersa en un contexto históricamente violento del que el Estado no se ha ocupado, se ha contri-

buido a construir la ciudad como un territorio peligroso.

Sin embargo, en las guerras contemporáneas, una de las características principales tiene que ver con que el ejercicio del derecho a la violencia y a matar no es monopolio único del Estado, como se establece en la teoría weberiana, sino que, progresivamente, este derecho es reclamado ahora por múltiples actores: milicias urbanas, ejércitos privados, ejércitos de señores locales, ejércitos del Estado, etc., los cuales se constituyen en máquinas de guerra orientadas al control de territorios delimitados y que tienen como principal objetivo la población civil (Mbembe, 2011).

De esta manera, según Mbembe (2011), hay una fusión completa de la guerra y la política, desde donde se construye la imagen del otro como una amenaza a la vida propia, que conlleva a la necesidad de la eliminación biofísica de esos otros. En este caso, a través de las víctimas como “chivos expiatorios” para garantizar la seguridad y la vida.

Mbembe (2011) resalta las colonias como el espacio social por excelencia, donde se ejerce el poder al margen de la ley, en tanto el Estado no reconoce ninguna autoridad superior en su territorio, lo que le dota de total autoridad para decretar el estado de excepción cuando lo considere necesario. Estos espacios son como una especie de fronteras; zonas en las que la guerra y el desorden, las figuras internas y externas de lo político, se entrecruzan y se trastocan (Mbembe, 2011). Así, la violencia que se permite por la permanencia de un estado de excepción es considerada como un recurso al servicio de la civilización, en tanto quienes residen en estas zonas son dehumanizados, reducidos a una condición salvaje por vía del criterio racista.

La ciudad del colonizado, o al menos la ciudad indígena, la ciudad negra, la «medina» o barrio árabe, la reserva es un lugar de mala fama, poblado por hombres con mala fama. Allí se nace en cualquier parte, de cualquier manera. Se muere en cualquier parte, de cualquier cosa. Es un mundo sin intervalos, los hombres están unos sobre

otros, las casuchas unas sobre otras. La ciudad del colonizado es una ciudad hambrienta, hambrienta de pan, de carne, de zapatos, de carbón, de luz. La ciudad del colonizado es una ciudad agachada, una ciudad de rodillas, una ciudad revolcada en el fango (Fanon, 1999, citado por Mbembe, 2011, p. 15).

Ocurre así, actualmente, en las colonias modernas, en las favelas, en las invasiones, en los caseríos, en los sectores de los estratos más bajos de la escala social, e incluso en ciudades enteras que han sido reducidas de alguna manera al carácter de una colonia, tal como aquí se quiere mostrar para el caso de Buenaventura.

4. Prácticas de terror y muerte en Buenaventura: expresión de la colonialidad del poder y la necropolítica

Para analizar la forma como se expresa la colonialidad del poder y la necropolítica en Buenaventura, en el presente apartado se enfoca la atención en cuatro aspectos: a) la presencia y accionar de los actores armados que implica prácticas de terror y muerte; b) las razones por las que se presenta esta situación en Buenaventura, más allá de su posición geoestratégica; c) la posición adoptada por el Estado frente a la precariedad de las condiciones de vida de los bonaverenses, y, finalmente, d) la respuesta de la población.

4.1 Actores y acciones violentas en Buenaventura

La dinámica del conflicto armado y de la violencia ilegal en Colombia se caracteriza por la presencia de una multiplicidad de actores que se asientan y ejercen control en las regiones, a través de formas variadas de violencia, es decir, que no es posible hablar de una caracterización homogénea válida para todas las regiones. Buenaventura, sin embargo, podría considerarse como el lugar donde se han hecho presentes todos los actores y, por ende, todas las formas de violencia.

De acuerdo con el CNMH (2015), en su informe *Buenaventura, un puerto sin comunidad*, es posible identificar tres periodos de violencia según la presencia de actores. El primero durante la década de 1990, en la que el control territorial estaba determinado por la guerrilla de las FARC. El segundo, desde 1998, aproximadamente, hasta el año 2006, período de incursión y consolidación del Bloque Calima de las AUC en el Valle del Cauca y, por supuesto, en Buenaventura. Finalmente, el tercer período, correspondiente al accionar de las bandas criminales, ahora GAO, formadas por antiguos miembros del Bloque Calima en articulación con hombres de los ejércitos armados del cartel del Norte del Valle: Machos y Rastrojos (sobre las que se habla en el apartado 2.1). No obstante, en la actualidad, también se ha registrado en los últimos años la presencia de disidencias de las antiguas FARC en zona rural, como también del ELN (Defensoría del Pueblo, 2019).

En consecuencia, la perpetuación del ejercicio de la autoridad a manos de actores ilegales implica el despliegue de acciones que posibiliten el control del territorio. Se trata de un repertorio de acción amplio que evidencia un reciclaje de la violencia (Acosta, 2019; Ronderos, 2014), en tanto los actores surgen de alianzas entre paramilitares y hombres del narcotráfico, como es el caso de Los Rastrojos, por ejemplo, o como en el caso de las guerrillas, que simplemente reproducen y perfeccionan acciones suficientemente probadas como eficientes. Como característica esencial, buscan la creación de un ambiente de terror que les posibilite ganarse la sumisión de los pobladores e impedir la presencia de la autoridad legal.

(...) amenazas individuales y colectivas; homicidios selectivos y de configuración múltiple; confinamiento o restricciones a la movilidad; ataques indiscriminados con artefactos explosivos improvisados; desapariciones y desplazamientos forzados masivos y gota a gota; reclutamiento forzado y utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes y violencia sexual contra las mujeres (Verdad Abierta, 2019, párr. 8).

En cuanto a la zona rural de Buenaventura, las Farc son la principal fuente de riesgo porque busca controlar el territorio e impe-

dir el ingreso de otras estructuras ilegales. (...) Imponen normas de conducta a la población y realiza acciones que generan terror en la comunidad, esto es, homicidios, amenazas y confinamiento de la población (Defensoría del Pueblo en Verdad Abierta, 2015a, párr. 20).

(...) aquí todos estamos pagando: transportadores, comerciantes, vendedores ambulantes y hasta aquellas personas que venden chontaduro y comidas caseras en las puertas de su casa (...) (Sacerdote Diócesis de Buenaventura en Verdad Abierta, 2014, párr. 9).

Aunque se trata de acciones que también se presentan en otros territorios, como el departamento del Cauca, Nariño, Chocó o Antioquia, por poner ejemplos, también se resaltan acciones que tienen un matiz particular, en tanto implican una mayor crueldad. Es este el caso de las desapariciones forzadas, las masacres y los descuartizamientos y torturas que tienen lugar en las “casas de pique”. Espacios físicos destinados a la deshumanización, a la sevicia, a la muerte. Tal como en tiempos en los que se reconocía la existencia del paramilitarismo, se recurre a las fosas comunes como mecanismo para disminuir las cifras de víctimas y evitar cualquier responsabilidad (El País, 2014b).

Adicionalmente, como lo analiza Mbembe (2011) para las colonias, los actores armados controlan la cotidianidad de la población a través de la limitación a sus itinerarios. A este fenómeno se le conoce como la generación de fronteras invisibles que les obligan a transitar por un mismo sector dentro de la ciudad, mientras se prohíbe el paso hacia otros barrios o calles. Se rompen así relaciones entre vecinos y familiares, pero también se alteran las rutinas de los pobladores y se garantiza la libertad para que los victimarios puedan actuar sin la intromisión de terceros, entre estos las mismas fuerzas coercitivas del Estado.

(...) no solo basta asesinar a las personas sino descuartizarlas, desaparecerlas, masacrarlas y a sus familiares desplazarlos, estigmatizarlos, a los niños reclutarlos, y condicionar la movilidad de la gente en fronteras invisibles (Sacerdote Diócesis de Buenaventura en Verdad Abierta, 2014, párr. 10).

Sobre las fosas, la ‘casa de pique’ (nombre con el que se le conoce a los sitios en donde desmiembran a las víctimas) y las víctimas desmembradas, «por fin la Fiscalía está entrando a ciertos lugares que son prohibidos por las bandas, lugares vedados. (...) la comunidad conoce de sitios como estos en donde las bandas desmembran a sus víctimas y las entierran clandestinamente, pero no son denunciados por temor a represalias» (Director de Pastoral Social en Verdad Abierta, 2015a, párr. 8).

Cuando entraron a disputarle el control de las rentas ilegales de ese puerto en el Pacífico a ‘Los Rastrojos’. En medio de esa confrontación, los entonces denominados ‘Urabeños’, volvieron a recurrir a las casas de pique, que en antaño utilizaron los paramilitares del Bloque Calima para torturar, desmembrar y desaparecer a sus víctimas (Verdad Abierta, 2016, párr. 14).

Sobre la desaparición forzada, HRW llama la atención que los «grupos sucesores del paramilitarismo» optan por desmembrar los restos de sus víctimas y arrojarlos al mar o enterrarlos en fosas comunes, y que «atormentan a familiares de víctimas de desapariciones, diciéndoles que sus seres queridos fueron ‘picados’ y los amenazan para que no denuncien lo sucedido». Por esta razón, las cifras de desaparecidos pueden ser mayores (Verdad Abierta, 2015b, párr. 5).

La deshumanización de las personas convertidas en víctimas de la violencia expresa el ejercicio de un poder ilegal que decide sobre el valor de la vida de las personas afrodescendientes y, en menor proporción, indígenas, que residen en esta ciudad. En ocasiones, se trata de un medio para alcanzar propósitos económicos, en ocasiones es un fin en sí mismo. En consecuencia, el derecho a matar en la experiencia de Buenaventura no es solo reclamado por el Estado, sino por “entidades necroempoderadas”, como las organizaciones paramilitares, que desarrollan técnicas sofisticadas de muerte sobre otros dejados a su suerte por un Estado que se proclama de Derecho (Estévez, 2018).

Así, en esta ciudad se evidencian actores, técnicas y espacios de muerte, tanto porque tiene lugar efectivamente el asesinato masivo de

pobladores como por las condiciones de vida precaria que mantienen a la población en situación de supervivencia, como consecuencia de las políticas socioeconómicas de un Estado neoliberal. Es decir que, como un elemento central del ejercicio del poder necropolítico se encuentra una perspectiva colonizadora que orienta la estructuración y las disposiciones del Estado. Por ello, desde la posición que aquí se adopta, la situación violenta permanente en la que viven los bonaverenses no se explica solo por cuenta de su posición estratégica, sino de su condición étnico racial.

4.2 ¿Por qué en Buenaventura?

Esta posición geoestratégica de Buenaventura no es la única forma de explicar su dinámica violenta (Vega-Cantor, 2012), ya que debe añadirse que Buenaventura es el reflejo de una forma de administración estatal centralizada que se ha concentrado en la inversión en ciudades específicas como Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga, entre otras, sacrificando otras más pequeñas. Esta situación ocurre pese a que este puerto le genera importantes ingresos al país, como se menciona en la introducción de este artículo, lo que contribuye a que, de los 42 municipios del Valle del Cauca, Buenaventura sea la ciudad con el mayor índice de NBI.

La crisis social (no hay hospitales públicos en funcionamiento, el desempleo es superior al 60%, el índice de pobreza es del 80% y la educación pública se convirtió en negocio particular) desborda cualquier anhelo bienintencionado y hace necesario tomar medidas de choque por parte del gobierno nacional (Verdad Abierta, 2015d, párr. 9).

El Estado neoliberal solo se interesa por la obtención de los recursos económicos que pueden generar territorios marginados como Buenaventura, desconociendo a sus habitantes. Así, en cada administración se reproduce una situación de exclusión de estas poblaciones, sumiéndoles en la pobreza, en comparación con otras poblaciones de la nación. De acuerdo con Casanova (2006), se trata de una opresión de unos grupos y clases dominantes sobre otros, como un factor central en la ex-

plicación de las condiciones de precariedad y subdesarrollo de sociedades como la colombiana, reflejado en la situación de la población bonaverense. Es decir, de la expresión del colonialismo interno.

En consecuencia, en la exclusión de estos grupos humanos, se hace presente como elemento central la colonialidad del poder, de tal manera que la clase se cruza con la condición étnico racial de los miembros de dichos grupos: afrocolombianos e indígenas, en el caso de los habitantes de Buenaventura. Se trata de la articulación mencionada por Quijano (2005) entre capitalismo, Estado-nación y colonialismo. Vale la pena mencionar que no es una situación exclusiva de Buenaventura. Ocurre lo mismo en el pacífico nariñense, en el pacífico caucano y en el Chocó; regiones todas caracterizadas por la condición étnico racial afrocolombiana de sus habitantes, quienes además viven en situación de pobreza.

No nos digamos mentiras: el gobierno nacional se ha usufructuado de Buenaventura, pero la población no ha sido beneficiada. (...) La pobreza y la violencia deben ser consideradas de manera pluridimensional, con relación a salud, vivienda, educación y recreación, pero todos esos elementos están por hacerse en Buenaventura. Mientras perdure una mentalidad neoliberal, que es la ganancia por la ganancia, y tener lo más que se pueda, no podrá haber atención a este puerto, y a la ciudad sobre todo. Aquí el acento es que el puerto es lo importante, pero se le debe poner atención a la gente. (...) todo el problema de Buenaventura es que vemos entrar y salir la riqueza y nosotros somos solo espectadores (Verdad Abierta, 2015c, párr. 6 y 7).

(...) el gobernador del Valle del Cauca, Ubémar Delgado, cuestionó la falta de inversión del gobierno nacional, (...) «a la fecha no se ha visto una inversión importante, y Buenaventura le ha entregado a la Nación en los últimos dos años 8.8 billones de pesos y debe verse retribuido de alguna manera los recursos para una revolución social en el Puerto» (Verdad Abierta, 2015a, párr. 18).

Más allá de las ganancias multimillonarias del Puerto, la miseria de sus habitantes es un lugar común y, aquellos que viven en los sectores de baja mar, combinan esa

pobreza con la sevicia de las bandas que surgieron tras la desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) (Verdad Abierta, 2015d, párr. 3).

(...) por la precariedad en la que viven, son objetivo de los grupos armados ilegales para ser reclutados o utilizados en la confrontación armada, además de esto se evidencia que los grupos armados ilegales en las comunas 3, 4, 9, 10, 11 y 12, utilizan el microtráfico como estrategia de acercamiento y posterior convencimiento de ingresar a sus filas. Por esas razones, muchos padres han optado por no enviar a sus hijos a la escuela (...) (Verdad Abierta, 2019, párr. 11).

Así, los actores armados ilegales se valen de la precariedad en la que habita gran parte de la población bonaverense, pero sobre todo de la ausencia de las instituciones del Estado. En este sentido, se expresa el biopoder de este último, que tiene la potestad de hacer vivir pero también de dejar morir: “se trata de un asesinato indirecto, porque sin necesidad de que poblaciones enteras sean matadas intencionalmente, estas mueren como consecuencia de que el Estado no haga algo por ellas” (Estévez, 2018, pp. 12-13).

4.3 Denuncias constantes, medidas ineficientes, represión

Esta ausencia del Estado se evidencia en el hecho de que, aunque organizaciones sociales nacionales e internacionales, la iglesia, la academia y algunos medios de comunicación ponen en evidencia la situación crítica en la que se vive en Buenaventura, la autoridad sigue estando en manos de actores ilegales que se dedican a la gestión de la muerte, pero además a través de técnicas sofisticadas. En consecuencia, más allá de tratarse del ejercicio del biopoder del Estado moderno, en este caso se trata más bien del establecimiento de una necropolítica. Es decir, no solo no se vira la mirada hacia Buenaventura, pese a toda evidencia, se les condena a sus habitantes a la muerte de manera directa.

Por esta razón, las denuncias manifiestas por las entidades encargadas de visibilizar el ries-

go en el que se encuentran los habitantes, por cuenta de la presencia de actores armados enfrentados, no son respondidas y terminan acumulándose sin surtir ningún efecto. Se omiten porque se trata de una población que no representa ningún valor para un Estado capitalista, neoliberal y “colonial”. En este mismo sentido, sus instituciones coercitivas tampoco garantizan la protección, porque se encuentran en una situación subordinada a los actores armados, quienes realmente ejercen el poder, pero como consecuencia lógica de un Estado desinteresado en garantizar los derechos de estos “cuasi ciudadanos”. En consecuencia, no se busca una estrategia real de control del territorio que garantice la recuperación de la autoridad legal de manera sólida y sostenida.

La Defensoría del Pueblo emitió tres alertas tempranas de inminencia (...) describiendo los escenarios de posibles vulneraciones de derechos humanos que afrontan los habitantes de Buenaventura (...). En estos documentos, se les hace un llamado a entidades estatales del orden local, regional y nacional para que tomen medidas que mitiguen las amenazas descritas y no ocurran más tragedias (Verdad Abierta, 2019, párr. 1).

La Personería de Buenaventura le ha hecho un fuerte llamado a las autoridades para que les garanticen la seguridad a los habitantes de los barrios afectados por la violencia y hagan presencia efectiva en todo el territorio. «La gente está asustada porque la Policía llega hasta cierto punto y no ejerce control en bajamar y en el monte», indicó una fuente de esta dependencia del Ministerio Público (Verdad Abierta, 2013, párr. 7).

Para la Comisión de Vida, Justicia, Solidaridad y Paz de la Diócesis de Buenaventura no es claro por qué «las autoridades locales hicieron caso omiso a las recomendaciones» de la Defensoría del Pueblo, que advirtió «con suficiente tiempo y anticipación el riesgo que suponía en el Distrito de Buenaventura la presencia de los grupos autodenominados La Empresa y Los Urabeños». Por esa razón, la Diócesis hizo un llamado urgente al Gobierno Nacional y a diferentes entidades estatales, para que «le brinden medidas de protección y garantía de sus

derechos a las comunidades y el territorio» (Verdad Abierta, 2012, párr. 5).

Adicionalmente, vale la pena enfatizar en el carácter paramilitar de estas organizaciones armadas que hoy se consolidan en la ciudad. Pese a su atomización, siguen haciendo uso del repertorio de acción paramilitar y el Estado no las construye como enemigo, como sí ha ocurrido históricamente con las guerrillas.

De otro lado, con el propósito de fungir como autoridad legal, las medidas tomadas por la administración nacional se reducen al reforzamiento de la “mano derecha del Estado”, que involucra el despliegue de una serie de medidas represivas como el aumento de pie de fuerza o la militarización del territorio en cuestión (Wacquant, 2014). Este tipo de accionar lleva implícita la construcción de la población residente en Buenaventura como peligrosa, contaminada por un ambiente de narcotráfico, contrabando, delincuencia y violencia. Se trata de la extensión de la responsabilidad de la crisis social a la población víctima, culpabilizándola de una situación en la que han sido puestas por la desatención estatal. En este sentido, como señala Mbembe (2011), se genera un estado de excepción materializado a través de un control militar y policial que regula la vida.

Estos estados de excepción validan la militarización de las poblaciones como parte del proceso de consolidación de la necropolítica, que convierte en sospechoso a cualquier poblador que no se acoja a las reglas establecidas oficialmente, como por ejemplo los toques de queda. De esta manera, se otorga licencia al Estado para desplegar sus “funciones mortíferas” no solo a victimarios sino también a las víctimas.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, ordenó en la noche del miércoles la militarización de Buenaventura, como una muestra más del acompañamiento integral exigido por el presidente de la República, Juan Manuel Santos. Según el funcionario, no se va a permitir que la criminalidad siga azotando al Puerto, por eso decidimos su militarización en ciertos sectores (El País, 2014a, párr. 1).

La situación llegó a un punto tan alto a finales de 2013 y comienzos de 2014 que el go-

bierno nacional se vio obligado a intervenir de manera directa, aumentando el pie de fuerza, tanto de Policía como de Ejército, para controlar la situación (Verdad Abierta, 2015a, párr. 5).

El descubrimiento de varias ‘casas de pique’ –nombre con el que se conocen los sitios en donde criminales descuartizan a sus víctimas–, hicieron que el presidente de la República, Juan Manuel Santos, anunciara el pasado 6 de marzo una “intervención especial” para mejorar la seguridad y acabar con los grupos que generan terror en Buenaventura (Verdad Abierta, 2015b, párr. 2).

De esta manera, la ausencia del Estado hace referencia a la falta de garantías de seguridades básicas y derechos de la población de la que son indicadores la falta de oportunidades, la pobreza, pero, de manera singular, la presencia de actores armados ilegales de orígenes y naturalezas diversas que someten a la población a su arbitrio y les obligan a estar entre la vida y la muerte de manera constante. Esta situación es permitida por el Estado dado que no se desarrollan políticas efectivas que busquen una transformación estructural de las condiciones de vida de la población, más allá de medidas represivas.

Así, el funcionamiento del necropoder se presenta tanto desde la forma de ejercicio del poder por parte del Estado como del control ilegal que realizan los actores armados ilegales. Esta necropolítica se caracteriza porque atraviesa diferentes espacios de la cotidianidad de los bonaverenses como “a) salud física y emocional; b) dominio de bienes y servicios; c) cultura y vida social; d) asociaciones cívicas; e) economía; f) violencia y relaciones coercitivas; y g) instituciones regulatorias y legales” (Held, citado por Achoy, 2018, p. 39).

4.4 La respuesta de los Bonaverenses

Lejos de ser actores pasivos, la población residente en Buenaventura ha respondido a este contexto violento que condiciona su cotidianidad. Esta respuesta se expresa a través de protestas sociales y formas de resistencia frente al accionar de los actores armados, como también frente a la inoperancia del

Estado o a sus políticas de corte neoliberal que plantea un desarrollo de espaldas a la ciudad-puerto. De acuerdo con Archila (2011), citado por Jaramillo *et al.* (2020), entre 1975 y 2015, Buenaventura presentó 253 luchas sociales, siendo una de las ciudades intermedias que más registró este tipo de procesos expresados a través de acciones colectivas.

Las demandas han sido variadas. Entre estas, se pueden señalar las denuncias por el impacto de los megaproyectos promovidos durante el gobierno de Juan Manuel Santos (2010-2014) en su plan de desarrollo; demandas por “el acceso a la justicia, el territorio, la educación, la salud, la productividad, el empleo, el saneamiento básico, el ambiente y la cultura” (Jaramillo *et al.*, 2020, p. 146); demandas por el derecho a vivir y en paz, es decir, contra la violencia de los actores armados y frente al Estado que debe garantizarles la protección de la vida, como, por ejemplo, el Paro Cívico en Buenaventura «Para vivir con dignidad y en paz en el territorio», que tuvo lugar en mayo de 2017, durante 22 días.

De acuerdo a Monseñor Héctor Espalza, Obispo de Buenaventura y líder del Comité del Paro Cívico, en una entrevista para realizada por el diario El País: «La Iglesia está de parte del pueblo, no porque quiera la revuelta si no que se solucionen las cosas. Queremos la paz pero con justicia social, no con el neoliberalismo que enriquece a unos y maltrata a los empleados portuarios y a la población. Por eso acompañamos el paro cívico. Si la paz quiere ser verdadera tiene que tener como base la justicia social, eso es lo que pretendemos con el paro cívico» (Colombia Informa, 2017, párr. 2).

Vale la pena señalar que algunas marchas en el marco de este paro cívico se efectuaron también en contra de las medidas represivas del Estado, como fue el toque de queda decretado en respuesta a los varios días de huelgas masivas que habían tenido lugar en la ciudad, justificado por el gobierno nacional de Juan Manuel Santos como una respuesta a acciones de hecho que tuvieron lugar durante las protestas (El País, 2017a).

En este tipo de acciones colectivas que implican procesos organizativos, realización de

foros sobre derechos humanos, cacerolazos, plantones, marchas, bloqueos, concentraciones, se manifiesta la articulación de diferentes actores como la iglesia, la academia, las centrales de trabajadores, la población civil y, de manera especial, las y los jóvenes. Así, recientemente, durante el paro nacional en Colombia que tuvo lugar en abril de 2021, el liderazgo en la convocatoria a salir a las calles estuvo en manos de jóvenes que 4 años atrás hicieron parte del Paro Cívico en Buenaventura, ahora agrupados bajo la denominación “Buenaventura Resiste”. Haciendo uso de las redes sociales, a través de la promoción del #SOSBuenaventura, consiguieron que el país pusiera la mirada en lo que allí acontecía y que, aproximadamente, 500 personas salieran a las calles (La Silla Vacía, 2021).

En consecuencia, pese a que es innegable la cooptación de miembros de la población bonaerense por parte de las organizaciones al margen de la ley –principalmente jóvenes–, las y los habitantes de esta ciudad-puerto también han sido un actor importante y activo en los procesos de resistencia y movilización social, tanto frente a los actores armados de diversa índole como frente a los diferentes gobiernos que administran el Estado en detrimento de la población.

5. Conclusiones

En suma, el contexto sociopolítico de Buenaventura se constituye como un claro ejemplo de la relación existente entre la modernidad, el terror y la muerte. Es decir, la colonialidad del poder y su ejercicio a partir del control de los ámbitos de la existencia social. De hecho, no es mera coincidencia que las regiones y/o países de la “periferia” o “sur” correspondan, precisamente, a las áreas que habitaban las sociedades destruidas y/o colonizadas por los europeos. Así pues, podemos establecer, según la lógica argumentativa de Quijano (2005), que no es mera coincidencia que las relaciones entre la colonialidad del poder y el desarrollo se hubiesen establecido a través de una ideología racista que estratificó a Buenaventura desde otrora hasta hoy. Con base en categorías como raza, color y etnia se han constitui-

do relaciones intersubjetivas de poder. Ellas se hicieron parte inherente de la racionalización blanca-colonial que ha dominado, sobre todo, los territorios más pobres y racializados del pacífico colombiano. En Buenaventura, no solo confluye una discriminación con base en la raza y etnia de sus habitantes, sino que también se han instaurado profundas desigualdades económicas y socioambientales, mal justificadas debido al carácter/cultura de sus propias gentes. En otras palabras, no es posible establecer que las desigualdades sociales y económicas de los habitantes bonaverenses se deban a su cultura o etnicidad, sino a múltiples factores sociales que confluyen entre sí, como la violencia, el abandono estatal, el déficit de inversión en el gasto público local, el clientelismo y el narco paramilitarismo que se ha tomado con fuerza, en estos últimos años, la ciudad-puerto.

La violencia, por lo tanto, no puede entenderse, como tradicionalmente se ha hecho, a partir de causalidades naturales o morales (vinculadas a la religión o a las tradiciones culturales de la región). Tampoco son comprensibles los llamados factores de riesgo que la determinan, sino que debe ser concebida como una relación particular del conflicto social que se cristaliza en un territorio y en un tiempo específico, debido a los intereses que los múltiples actores tienen sobre el territorio (Carrión, 2008). Así pues, la violencia debe comprenderse como producto de una relación social del conflicto que, en consecuencia, vincula por lo menos un par de oponentes, actores, individuos o colectivos, pasivos o activos en la relación (Guzmán, 1994, citado por Carrión, 2008).

En el caso particular de Buenaventura –como se ha intentado reflexionar a lo largo de este texto en correspondencia con el análisis de Mbembe (2011)–, para las colonias ubicadas en zonas marginalizadas de las sociedades, la violencia se presenta como resultado de la poca importancia que estas poblaciones tienen para los gobiernos neoliberales, que solo se interesan en los recursos o beneficios económicos que estos territorios les proporcionan, pero sin que ello redunde en garantías para sus poblaciones. Además de esta violencia estructural, se presenta una violencia más direc-

ta, por cuenta de la presencia de las Fuerzas Armadas del Estado en el territorio, con el fin de exterminar a otros actores armados ilegales. De estos últimos proviene la violencia que viola el Derecho Humano Internacional (DIH), por cuenta de acciones cargadas de terror –ya relatadas en este documento– como mecanismo para ejercer el poder, controlando y dominando a la población bonaverense.

Después de la desmovilización de varios grupos paramilitares durante los años 2004-2006 y posterior a la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC, en el año 2016, bajo el mandato del ex presidente Juan Manuel Santos, en el país y, especialmente, en Buenaventura, se han vivido algunos periodos de cese de fuego armado y de prácticas extremas como el desmembramiento de cuerpos de personas en casas de pique (El País, 2017b); pero ello no quiere decir que, entre los años 2015 y 2019, los actores armados ilegales hubiesen desaparecido de Buenaventura (El País, 2015). Hoy no es posible hablar de una paz estable y duradera en esta región (zona geoestratégica y corredor fronterizo a orillas del mar Pacífico).

Las políticas de desarme, desmovilización y paz, pese a sus importantes logros, evidenciados de manera cuantitativa (armas entregadas, hombres y mujeres desmovilizados, acciones bélicas y acciones como masacres o secuestros disminuidas y casi ausentes entre 2016 y 2017, desaparición de las AUC y de las FARC como organizaciones armadas), como lo señala Gutiérrez (2020), no tuvieron la misma efectividad en todo el territorio nacional. Es decir, para algunas poblaciones la violencia no terminó. Desde el análisis que se ha querido exponer aquí, esta situación es resultado de políticas enmarcadas en el funcionamiento de un Estado neoliberal, que se rehúsa a atacar las condiciones estructurales que sostienen el conflicto armado y, en general, las formas de violencia que derivan de este. En este sentido, los acuerdos de paz en cierta medida terminan por ser una ficción y, tras los momentos coyunturales de la negociación, se retorna a un nuevo despliegue de actores violentos con sus repertorios de acción en nuevos escenarios.

Por consiguiente, uno de los principales argumentos de este trabajo hace referencia a la reconfiguración del control territorial a través de nuevos grupos ilegales, durante el periodo ya señalado. Algunos grupos armados se acogieron al proceso de paz, pero otros surgieron en el territorio como los modernos GAO; o se fortalecen grupos ya existentes, que conservan el nombre, pero involucran nuevos militantes más jóvenes, como es el caso de La Banda, La Local y el Frente Fuerza Unida del Pacífico. En ocasiones, esta reconfiguración del control territorial no es vivida así, debido a la naturalización del conflicto armado en Colombia (Duncan, 2005). Son tantos años de violencia y prácticas bélicas que períodos breves de cese al fuego se viven como escenarios reales de paz e inclusión. Al contrario, y como se evidenció en acápite anteriores, los mecanismos de terror y muerte, como secuestros, asesinatos, extorsiones y desplazamientos, durante estos últimos años, no acabaron. Así, pues, disertar

sobre la violencia en Colombia implica tener en cuenta tanto aspectos estructurales como históricos, pero también aquellos aspectos intersubjetivos en donde se visibilizan las historias y narrativas de los victimarios y sus víctimas.

Sin temor a equívocos, es posible establecer que Buenaventura no se encuentra ante un escenario de posconflicto en la nación. Es más prosaico hablar del período de implementación del pos acuerdo de paz. Este implica un proceso de gran vulnerabilidad para las sociedades y sobre todo para las víctimas, ya que después de sufrir el impacto de confrontaciones armadas múltiples, resulta difícil reconstruir la institucionalidad y restablecer la normalidad que hace referencia a la convivencia civil (Molano-Rojas y Echavarría-Olózaga, 2015), sobre todo en aquellos territorios olvidados por el Estado y colonizados por actores violentos, durante décadas, como ha ocurrido en Buenaventura tanto en sus zonas rurales como urbanas.

Referencias

- Achoy, J. M. (2018). Necropoder: el Derecho y la Política entre los vivos y los muertos. *Ars Iuris Salmanticensis. ESTUDIOS*, 6(2), 33-46. <http://revistas.usal.es/index.php/ais/article/view/18980>
- Acosta, C. (2010). *Conflicto armado en el Valle del Cauca durante la primera década del siglo XXI: masacres, secuestros y desplazamientos forzados. Los datos y la voz de las víctimas* (Informe de Investigación). Universidad del Valle. <https://www.doi.org/10.13140/RG.2.2.10215.50084>
- Acosta, C. (2019). La reinención de la violencia en Colombia como desafío para la pacificación: el caso de las Bacrim. En J. Sánchez y C. Acosta (Eds.), *Las Huellas del Desarrollo. Intersecciones entre conflicto, reconfiguración social y pacificación en Colombia* (pp. 323-354). Ediciones USTA.
- Ballestrin, L. (2013). América Latina e o giro decolonial. *Revista Brasileira de Ciência Política*, (11), 89-117. <https://doi.org/10.1590/S0103-33522013000200004>
- Caicedo, A. F. (2013). *Daños provocados en la comunidad negra del barrio La Inmaculada por la implementación de la primera fase del proyecto portuario "Terminal de Contenedores de Buenaventura-TCBUEN"* (tesis de pregrado). Universidad del Valle, Buenaventura, Colombia. <https://bibliotecadigital.univalle.edu.co/xmlui/bitstream/handle/10893/10647/CB-0523787.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Carrión, M. F. (2008). Violencia urbana: un asunto de ciudad. *EURE (Santiago)*, 34(103), 111-130. <https://dx.doi.org/10.4067/S0250-1612008000300006>
- Carvajal, P. y Alberto, E. (2007). Ocho tesis acerca de lo que está pasando en Buenaventura: evidencia de un caos. *Posiciones*, (1), 42-57.
- Casanova, P. (2006). *El colonialismo interno*. CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20130909101259/colonia.pdf>
- CNMH –Centro Nacional de Memoria Histórica–. (2015). *Buenaventura: un puerto sin comunidad*. CNMH.

- Colombia Informa. (2017, 16 de mayo). *Paro Cívico en Buenaventura: «Para vivir con dignidad y en paz en el territorio»*. <http://www.colombiainforma.info/paro-civico-en-buenaventura-para-vivir-con-dignidad-y-en-paz-en-el-territorio/>
- Co.marca Digital y Universidad del Cauca. (2019, 16 de junio). *En el Pacífico Medio se ilusionan con los dineros de la paz*. <https://colombiacheck.com/especiales/los-numeros-del-posconflicto/en-el-pacifico-medio-se-ilusionan-con-los-dineros-de-la-paz>
- Corporación Nuevo Arco Iris. (2017). *Dinámicas del desplazamiento forzado de comunidades afrodescendientes en Buenaventura: corredores estratégicos entre la legalidad y la ilegalidad*. <https://www.arcoiris.com.co/2017/06/buenaventura-corredores-estrategicos-entre-la-legalidad-y-la-ilegalidad/>
- DANE –Departamento Administrativo Nacional de Estadística–. (2018). *Censo nacional de población y vivienda*. <https://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/demografia-y-poblacion/censo-nacional-de-poblacion-y-vivend>
- Defensoría del Pueblo. (2019). *Alerta Temprana N° 007-19, de Inminencia*. AT-N°-007-19-VAL-Buenaventura. <http://www.indepaz.org.co/wp-content/uploads/2020/02/AT-N%C2%B0-007-19-VAL-Buenaventura.pdf>
- Duncan, G. (2005). *Del campo a la ciudad en Colombia. La infiltración urbana de los señores de la guerra* (Documentos CEDE 002260). Universidad de los Andes; CEDE.
- El País. (2014a, 20 de marzo). *Ordenan la militarización del puerto de Buenaventura*. <https://www.elpais.com.co/judicial/ordenan-la-militarizacion-del-puerto-de-buenaventura.html>
- El País. [Alejandro Chaves Forero Periodista]. (2014b, 2 de abril). *Las Casas de pique en Buenaventura, Informe Especial* [Video]. YouTube. <https://www.youtube.com/watch?v=9Uu5c9zTMRy>
- El País. (2015, 5 de marzo). *La violencia no cesa en el principal puerto del Pacífico colombiano*. https://elpais.com/internacional/2015/03/05/actualidad/1425520234_787028.html
- El País. (2017a, 19 de mayo). *Caos en Buenaventura: disparos, saqueos, enfrentamientos y toque de queda*. <https://www.elpais.com.co/judicial/caos-en-buenaventura-disparos-saqueos-enfrentamientos-y-toque-de-queda.html>
- El País. (2017b, 25 de agosto). *Homicidios siguen a la baja en Buenaventura*. <https://www.elpais.com.co/valle/homicidios-siguen-a-la-baja-en-buenaventura.html>
- El Tiempo. (2020, 26 de julio). *Puerto Buenaventura, gran protagonista del comercio exterior*. <https://www.eltiempo.com/mas-contenido/puerto-de-buenaventura-gran-protagonista-del-comercio-exterior-521954>
- Estévez, A. (2018). Biopolítica y necropolítica: ¿constitutivos u opuestos? *Espiral, Estudios sobre Estado y Sociedad*, XXV(73), 9-43. <http://dx.doi.org/10.32870/espiral.v25i73.7017>
- Flórez, J. y Ruiz, A. (2018). Ciudad, violencia, memorias y políticas de seguridad: Buenaventura (1980-2013). En A. Guzmán (Ed.), *Violencia en cinco ciudades colombianas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI* (pp. 517-622). Programa Editorial Universidad Autónoma de Occidente.
- Gómez, D., Ladrón-de-Guevara, A. y Escobedo, R. (2017). Informe de la región suroccidental. En A. Ladrón-de-Guevara, G. Salazar y A. González-Chavarría (Eds.), *El conflicto en contexto. Un análisis de las regiones suroriental y suroccidental colombianas, 1998-2016* (pp. 163-258). Editorial Pontificia Universidad Javeriana.
- Gutiérrez, F. (2020). *¿Un nuevo ciclo de la guerra en Colombia?* Penguin Random House Grupo Editorial.
- Human Rights Watch. (2014). *La crisis en Buenaventura. Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico*. <https://www.hrw.org/es/report/2014/03/20/la-crisis-en-buenaventura/desapariciones-desmembramientos-y-desplazamiento-en-el>
- INDEPAZ –Instituto de estudios para el desarrollo y la paz–. (2020). *Presencia de grupos armados en Colombia 2018-2019*. Observatorio de DDHH y conflictividades INDEPAZ. <http://www.indepaz.org.co/informe-presencia-de-grupos-armados-en-colombia-2018-2019/>

- Jaramillo, J., Parrado, E. y Mosquera, D. (2020). El paro cívico de 2017 en Buenaventura, Colombia. Protesta social y transformación del poder político. *Análisis Político*, 33(98), 136-166. <https://doi.org/10.15446/anpol.v33n98.89414>
- La Silla Vacía. (2021, 9 de febrero). *En Buenaventura los jóvenes se toman la vocería que antes tenía el comité del paro*. <https://www.lasillavacia.com/historias/silla-nacional/en-buenaventura-los-jovenes-se-toman-la-voceria-que-antes-tenia-el-comite-del-paro>
- Mbembe, A. (2011). *Necropolítica*. Melusina.
- Molano-Rojas, A. y Echavarría-Olózaga, H. (2015). Justicia para el posconflicto: viejos y nuevos problemas en escenarios complejos. En A. Molano-Rojas (Ed.), *El Posconflicto en Colombia: reflexiones y propuestas para recorrer la transición* (pp. 15-24). Konrad Adenauer Colombia.
- Quijano, A. (2000). Colonialidad del poder y clasificación social. En CLACSO (Ed.), *Aníbal Quijano. Antología Esencial. Cuestiones y horizontes: de la dependencia histórico-estructural a la colonialidad/descolonialidad del poder* (pp. 285-330). CLACSO. <http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/se/20140506032333/eje1-7.pdf>
- Quijano, A. (2005). Colonialidad del poder, Eurocentrismo y América Latina. En E. Lander (Ed.), *La colonialidad del saber* (pp. 1-22). Instituto Cubano del Libro; Editorial de Ciencias Sociales.
- Ronderos, M. T. (2014). *Guerras recicladas. Una historia periodística del paramilitarismo en Colombia*. Penguin Random House Grupo Editorial.
- Traverso, J. F. (2018). Poder y biopoder en la obra de Michel Foucault: del análisis de la sociedad disciplinaria al de la población. *Red Sociales, Revista del Departamento de Ciencias Sociales*, 05(02), 118-134. <http://www.redsocialesunlu.net/wp-content/uploads/2018/09/REDSOC025-07-ASEC-TRAVERSO-P%C3%81G.-118-134.pdf>
- Valencia, H., Silva, L. y Moreno, A. (2016). Violencia, desarrollo y despojo en Buenaventura. *Análisis*, (9), 1-20. <https://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/12685.pdf>
- Vega-Cantor, R. (2012). Colombia y geopolítica hoy. *EL ÁGORA USB*, 12(2), 367-402. <https://doi.org/10.21500/16578031.81>
- Verdad Abierta. (2012, 6 de noviembre). *Bandas criminales recrudecen violencia en Buenaventura*. <https://verdadabierta.com/lanzan-un-sos-a-raiz-de-la-violencia-en-buenaventura/>
- Verdad Abierta. (2013, 8 de noviembre). *La pugna detrás de los desplazamientos de Buenaventura*. <https://verdadabierta.com/la-pugna-detras-de-los-desplazamientos-de-buenaventura/>
- Verdad Abierta. (2014, 19 de febrero). *Multitudinaria marcha contra la violencia en Buenaventura*. <https://verdadabierta.com/multitudinaria-marcha-contra-la-violencia-en-buenaventura/>
- Verdad Abierta. (2015a, 30 de enero). *El terror no abandona a Buenaventura*. <https://verdadabierta.com/el-terror-no-abandona-a-buenaventura/>
- Verdad Abierta. (2015b, 4 de marzo). *“En Buenaventura se sigue sembrando terror”: Human Rights Watch*. <https://verdadabierta.com/en-buenaventura-se-sigue-sembrando-terror-human-rights-watch/>
- Verdad Abierta. (2015c, 8 de junio). *“Vemos entrar y salir la riqueza solo como espectadores”: Obispo de Buenaventura*. <https://verdadabierta.com/vemos-entrar-y-salir-la-riqueza-solo-como-espectadores-obispo-de-buenaventura/>
- Verdad Abierta. (2015d, 20 de septiembre). *Politiquería, pobreza y Bracrim: los retos de la paz en Buenaventura*. <https://verdadabierta.com/politiqueria-pobreza-y-bracrim-los-retos-de-la-paz-en-buenaventura/>
- Verdad Abierta. (2016, 12 de abril). *Circulan amenazas de ‘Gaitanistas’ en Valle del Cauca*. <https://verdadabierta.com/circulan-amenazas-de-gaitanistas-en-valle-del-cauca/>

- Verdad Abierta. (2017, 12 de diciembre). *Las 'grietas' del Andén Pacífico rumbo al posconflicto*. <https://verdadabierta.com/las-grietas-del-anden-pacifico-rumbo-al-posconflicto/>
- Verdad Abierta. (2018, 6 de junio). *¿Se avecina guerra entre disidentes de las FARC en el Naya?* <https://verdadabierta.com/se-avecina-guerra-disidentes-las-farc-naya/>
- Verdad Abierta. (2019, 26 de enero). *Tres municipios de Valle de Cauca, en alto riesgo por incremento de la violencia*. <https://verdadabierta.com/tres-municipios-valle-del-cauca-alto-riesgo-incremento-la-violencia/>
- Wacquant, L. (2014). Tiempos violentos. Marginalidad, etnicidad y penalidad en la ciudad neoliberal: una cartografía analítica. En C. Korol (Ed.), *Tiempos Violentos, Barbarie y decadencia civilizatoria* (pp. 177-211). Herramienta.
- Wade, P. (1997). *Gente negra nación mestiza, dinámicas en las identidades raciales en Colombia*. Editorial Universidad de Antioquia.